

DOCUMENTACION

LOS HECHOS DEL 30 DE JULIO

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS

El día 30 de julio, en plena calle de San Salvador, el pueblo salvadoreño, se enfrentó una vez más con una sangrienta explosión de violencia.

La violencia tiene hace tiempo carta de ciudadanía en El Salvador. Está siempre latente en una situación de tensa injusticia, de ofensiva desigualdad, de mínimos vitales anormalmente bajos para las mayorías rurales y urbanas. La situación alimenticia, el estado de salud, el nivel educativo y, en general, la opresión de nuestras masas populares son de sobra conocidas a nivel nacional y mundial. En los últimos tiempos, sin embargo, se percibe y se puede documentar un gradual e implacable deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Con una población que aumenta en cantidad y que crece en la conciencia de la contradicción que hay entre sus derechos y su verdadera situación, la economía parece estar casi completamente estancada; no aumentan al ritmo necesario los puestos de trabajo por falta de inversión adecuada y el desempleo en la ciudad y en el campo está alcanzando niveles de catástrofe nacional; la producción de alimentos está sometida a los caprichos de la especulación y a los intereses, ajenos al bien común, de los señores de la tierra; la participación política y social de los afectados por las adversas condiciones económicas está siendo limitada, en proporción directa a su necesidad y justificación, por los grupos que todavía sacan grandes beneficios de las desgracias del pueblo.

Es verdad que adversidades de la naturaleza y, sobre todo, la coyuntura económica internacional han contribuido a hacer las cosas difíciles para la economía salvadoreña. Pero estos daños se distribuyen de una forma sumamente injusta, haciendo que el peso de sus consecuencias cargue más sobre los más débiles y los menos dotados económica y socialmente. Es verdad que el Gobierno está intentando, a pesar de fuertes dificultades y presiones en contra, planes y reformas para enfrentar los síntomas más alarmantes de la calamidad nacional. Pero los remedios no avanzan al ritmo de los males y el déficit en términos de sufrimiento es cada vez mayor.

Junto a este implacable deterioro de las condiciones biológicas, económicas, sociales y políticas de las mayorías, va creciendo también la conciencia popular, el conocimiento más profundo por parte de las masas, de dónde se origina, quién causa y cómo se puede remediar su angustiosa situación. Esta mayor intensidad de conciencia popular se viene manifestando en nuevas organizaciones, nuevas publicaciones, nuevos gestos (la ocupación de Catedral sería uno), que sorprenden y asustan a quienes se han acostumbrado a pensar como natural que nuestros campesinos, obreros, habitantes de tugurios, maestros, estudiantes, etc., permanezcan sumisos a una situación de opresión, callados en sus angustias, ignorantes de las verdaderas causas de esa situación.

En este clima angustioso para las grandes mayorías, con su correspondiente actitud de protesta y lucha, han surgido personas y grupos que defienden y practican empresas desesperadas de terrorismo: asesinatos, secuestros, atentados con explosivos, robos, extorsión..., como si fuera éste el único camino hacia una nueva sociedad justa y pacífica.

Contra estos hechos de sangre y terror, así como contra el resurgir no cruento ni terrorista de protestas, denuncias y organizaciones de lucha, se ha desatado una

represión indiscriminada, progresiva y explícita por parte de personas privadas, grupos de presión y, sobre todo, de quienes constitucionalmente tendrían que asegurar el orden, la justicia y el respeto de los derechos humanos: los cuerpos de policía y seguridad. Esta represión, sistemática, creciente y no siempre publicada, ha tomado formas espectaculares en hechos como los de Chinamequita, La Cayetana, Tres Calles y últimamente el 30 de julio en San Salvador.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas condena, en nombre de los valores cristianos y humanos que la inspiran y guían, la violencia que se da entre nosotros, los salvadoreños, en todas sus formas.

Y en primer lugar condena como injusta, inhumana, y desde el punto de vista cristiano, como pecado contra Dios enraizado en nuestra sociedad, la violencia de una tremenda desigualdad en la distribución de la tierra, el ingreso, el poder social y político, que favorece a una pequeña proporción de la población y oprime, despoja y niega las posibilidades de una vida digna a la mayoría de los salvadoreños.

Condena la escalada de represión por parte de los cuerpos de policía y seguridad y su culminación actual en la exageradamente violenta represión de una manifestación estudiantil, el 30 de julio pasado, en que un número no determinado de personas fueron muertas, heridas y apresadas. Los sucesos antes mencionados y esta última masacre claman a la conciencia de los responsables para que se ponga fin a este tipo de acciones, que ofenden los principios más sagrados que profesa privada y públicamente el pueblo salvadoreño y todo pueblo civilizado.

Condena también las aventuras terroristas por la falta de respeto a la vida humana y demás derechos fundamentales de la persona y por juzgar que ni es éste un camino eficaz, ni ciertamente es un camino que conduzca a una sociedad más justa y pacífica.

La Comunidad Universitaria, acostumbrada por su profesión y obligada por su responsabilidad ante la sociedad a analizar los hechos y a buscar sus causas por complicadas y variadas que éstas sean, no puede aceptar las explicaciones simplistas, acientíficas y, en definitiva, falsas, que atribuyen todas las manifestaciones de la protesta, la denuncia y la lucha popular, a un vasto complot comunista de corte internacional. Para quien tenga conocimiento serio e información adecuada sobre la actividad de los diversos partidos comunistas en todo el mundo, de ninguna manera puede confundirse esa actividad con las peculiaridades específicas de otros partidos, organizaciones y movimientos que existen en el país. Sólo quienes intentan confundir o pretenden acuñar un slogan fácil y claro para movilizar fuerzas conservadoras o francamente reaccionarias, pueden afirmar que todos los que tratan de cambiar el actual estado de cosas son comunistas. Por el contrario, la mayor parte de ellos son auténticos salvadoreños, que expresan de una manera popularmente nacionalista su preocupación, su dolor y su protesta por los sufrimientos de salvadoreños, sin ninguna vinculación con países, gobiernos, escuelas o empresas extranjeras.

La Comunidad Universitaria protesta por este uso simplista o mal intencionado de la etiqueta de comunismo como un atentado y una amenaza contra la libertad para analizar, formular y exponer en los términos más propios de la realidad social salvadoreña, y pide a todos los sectores que se preocupan sinceramente por mejorar la condición de vida del pueblo salvadoreño, que procedan con más serenidad y rigor científico al analizar y exponer la situación político-social del país.

Las explicaciones simplistas llevan a acciones simplistas y muchas veces, por desgracia, brutales. El panorama socio-político de El Salvador es complejo y las raíces de sus males profundas. La represión por la fuerza bruta es una solución simplista a la par que ineficaz, porque no llega a las raíces de la violencia. La actuación de los gobernantes debe ser en profundidad, empleando la drasticidad, no en las calles contra estudiantes o en los cantones contra campesinos, sino en llevar a cabo reformas complejas y profundas a un ritmo tal que pronto la sociedad se haya transformado radicalmente.

A esta falsificación y caricatura de la realidad nacional contribuyen en gran medida los medios de difusión, reteniendo información, tergiversándola y dando una preferencia injusta a versiones y comentarios parciales. Una prensa que se jacta de ser de las únicas libres de América Latina dio en días pasados un triste espectáculo de sumisión al Gobierno o deplorable autocensura y defraudó a todos aquellos ciudadanos de buena fe que quisieron hacer uso de su derecho a ser informados sobre los graves sucesos que conmovieron al país. Es muy notable, a este respecto, la diferencia entre las noticias sobre la masacre del 30 de julio publicadas en El Salva-

dor y las servidas desde San Salvador a todo el mundo, por las agencias internacionales de prensa.

No poco complican la comprensión de los problemas ordinarios y extraordinarios de El Salvador, quienes se aprovechan de las crisis para fines particulares de política estrecha de grupo y sacrifican la objetividad de los análisis y la adecuación de las soluciones a intereses parciales o etapas inmediatas en la lucha por el poder. Mayor rechazo aún merecen quienes empujan irresponsablemente a jóvenes y otras personas u organizaciones idealistas a peligros no confesados o a enfrentamientos infructuosos y sin sentido para el bien general del país.

En un país como El Salvador, donde la mayoría de la población es campesina y saca del suelo con su trabajo una gran parte de la riqueza nacional, no es por medio de la represión del campesinado como se va a eliminar la violencia que sufre nuestra sociedad, sino más bien por la libertad de ese campesinado para organizarse y autoeducarse a fin de asumir sus responsabilidades económicas y políticas.

El poder de coerción que necesariamente tiene que haber en toda sociedad humana, tal como se concretiza en leyes e instituciones encargadas de hacerlas respetar como son la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad, tiene que servir para el bien más común y general y no para intereses más particulares. Una verdadera y profunda dedicación de estas instituciones a establecer el orden y la justicia en El Salvador les llevaría necesariamente a eliminar de raíz la violencia cotidiana, callada, estructural y sistemática que se hace a las masas populares.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, movido por el deseo de servir incondicionalmente a la verdad y a la justicia,

P I D E

a las más altas autoridades de la República que se establezca inmediatamente una **comisión imparcial investigadora**, con todos los poderes necesarios para un perfecto desempeño de su tarea, que establezca la realidad de los hechos, la suerte de las personas desaparecidas y la existencia y el grado de responsabilidades personales;

y P I D E

a los gremios profesionales, a las Instituciones y Asociaciones con influencia en la vida del país que se solidaricen y se sumen a esta justa y razonable petición.

San Salvador, 7 de Agosto de 1975.